



Reflexiones sobre interpretaciones recientes de la violencia en Colombia*

Sumario

Las tendencias de la violencia. Los mitos de la violencia. Causas objetivas y violencia. Causas objetivas y rebelión. Comentarios finales. Referencias.

Resumen

Estudios recientes han negado la relación de causalidad entre las condiciones objetivas y la violencia en Colombia. Este artículo critica la forma como se ha llegado a estas conclusiones y discute algunas hipótesis que vinculan la cultura y las causas objetivas con la violencia. Concluye con una discusión sobre la interpretación de la relación entre causas estructurales y el conflicto armado interno.

Palabras clave: *Colombia, violencia, violencia urbana, causas objetivas y rebelión, causas objetivas y violencia, cultura y violencia.*

Abstract

Recent studies have denied the relation of causality between objective conditions and violence in Colombia. This article criticizes the way in which these conclusions have been reached, and discusses some hypotheses that link culture and objective causes with violence. It ends with a discussion about recent interpretations of the relation between structural causes and the internal armed conflict

Artículo: *Recibido, septiembre de 2002; aprobado, octubre de 2002.*

Pedro Valenzuela: *Profesor Asociado, Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia). Profesor invitado, candidato a Ph.D., Departamento de Investigación en Conflictos y Paz, Universidad de Upsala (Suecia).*

Correo electrónico: *pedreras@yahoo.com*

* Estas ideas se presentaron en el Seminario sobre Pobreza y Violencia en Colombia, Departamento de Estudios sobre Desarrollo, Universidad de Upsala (Suecia), 28 de noviembre de 2001.

* These ideas were presented at the Poverty and Violence in Colombia Seminar, Department of Development Studies, Upsala University (Sweden), november 28, 2001.

Reflexiones sobre interpretaciones recientes de la violencia en Colombia

Pedro Valenzuela

Reconociendo la diversidad y multidimensionalidad de la violencia en Colombia, la literatura ha trascendido su énfasis en la confrontación de mediados del siglo pasado y la guerra insurgente para ocuparse de otras formas de violencia, no directamente relacionadas con el conflicto armado, que dan cuenta de la mayor parte de las muertes violentas en el país. Más recientemente, las explicaciones tradicionales que privilegiaron de manera recurrente condiciones estructurales como factores explicativos cruciales han sido seriamente cuestionadas. Mi propósito es ofrecer algunas reflexiones sobre los argumentos centrales de estas nuevas interpretaciones, en especial en lo referente a la relación entre causas objetivas y violencia.

Las tendencias de la violencia

La criminalidad y la violencia aumentaron de manera sostenida desde comienzos de los años setenta. Para mediados de la década la tasa de criminalidad llegó a 850 por cada 100.000 habitantes (pccmh), aunque como resultado del crecimiento poblacional, se redujo a 600 pccmh veinte años más tarde. Sin embargo, entre 1980 y 1999 el número de delitos se mantuvo por encima de 200.000.¹ Los delitos contra la propiedad y la vida dan cuenta del porcentaje más alto del total, y el homicidio, a su vez, del mayor porcentaje de delitos contra la vida.² Pese a que el número de homicidios se redujo marcadamente después de La Violencia y el gobierno militar, aumentó consistentemente hacia finales del Frente Nacional y de manera dramática a partir de 1985. Tras alcanzar su punto máximo en 80 pccmh, la tasa de homicidios declinó durante los noventa para situarse en alrededor de 70 pccmh, lo que equivale a casi cuatro veces el promedio latinoamericano.³

Aunque la tasa nacional de homicidios ha permanecido relativamente estable durante los últimos años, la violencia se ha diseminado. La drástica

¹ Castro & Salazar (1998).

² Policía Nacional (1999: 65), Trujillo & Badel (1998).

³ Castro & Salazar (1998).

caída de la tasa en algunos lugares y una reducción general en los municipios más violentos durante la segunda mitad de los noventa fueron compensadas por aumentos equivalentes en otros, especialmente en aquellos hasta entonces más pacíficos. Los municipios con tasas inferiores a 10 pccmh cayeron del 35 por ciento en 1990 al 20 por ciento en 1997. Durante el mismo período, los municipios con tasas de entre 10 y 50 pccmh aumentaron del 30 por ciento al 42 por ciento.⁴

Como se muestra en el cuadro 1, pese al aumento de la violencia relacionada con la guerra en comparación con décadas anteriores, la abrumadora mayoría de los homicidios se produce por fuera del marco del conflicto armado.

Cuadro 1. Muertes violentas en Colombia 1988-2000

Año	Violencia sociopolítica			Violencia común	
	Homicidios políticos	Desapariciones forzadas	Homicidios de personas marginadas	Muertes en acciones bélicas	Homicidios
1988	2.738	210	273	1.083	16.796
1989	1.978	137	364	732	20.101
1990	2.007	217	267	1.229	21.600
1991	1.829	180	389	1.364	25.110
1992	2.178	191	505	1.602	25.125
1993	2.190	144	161	1.097	24.042
1994	1.668	147	277	1.009	23.543
1995	1.831	85	371	1.049	22.321
1996	1.783	183	218	1.131	23.350
1997	2.318	215	85	1.280	23.200
1998					23.096
1999*	1.843	291	158	1.594	24.358
2000**	2.285	440	272	2.276	26.264
Total	24.648	2.440	3.340	15.446	298.906

Fuente: Comisión Colombiana de Juristas (2000a, 2000b, 1999). Las cifras de homicidios comunes para los años 1998-2000 son tomadas de la Policía Nacional (1999).

* Con excepción de homicidios comunes, incluye información de octubre de 1998 a septiembre de 1999.

** Con excepción de homicidios comunes, incluye información de octubre de 1999 a abril de 2000.

⁴ Rubio (2000: 9).

⁵ El estudio pionero fue *Colombia: Violencia y Democracia*, comisionado a un grupo de académicos por el gobierno colombiano a finales de los ochenta.

⁶ Los "mitos" se transcriben de Llorente, et. al. (2001).

La constatación de que la "violencia callejera" cobra más víctimas que la guerra misma ha dado lugar a numerosas explicaciones, ninguna de ellas exenta de problemas y controversia. Los esfuerzos por vincular las altas tasas de violencia al acelerado y caótico proceso de urbanización, por ejemplo, no han producido resultados convincentes. Más bien, la evidencia empírica contradice la existencia de una relación simple y no mediada entre estas variables. En Bogotá la violencia no sólo aumentó más rápidamente que la población, sino que se ha reducido pese al continuo crecimiento poblacional. Tras una fase de baja violencia (9 pccmh) en los años sesenta, de violencia mediana hasta 1990 (26 pccmh) y de violencia explosiva hasta mediados de los noventa (68 pccmh), la ciudad experimentó una caída de la tasa a 35 pccmh a finales de la década. Por otro lado, la tasa de delitos violentos de muchas capitales departamentales supera ampliamente la de Bogotá y a pesar de que el mayor número de ellos se comete en los centros urbanos, las altas tasas de violencia no están concentradas en las grandes ciudades.

Quizás la explicación más controvertida, muy aceptada por lo demás en círculos académicos y gubernamentales, identifica factores objetivos -como la pobreza absoluta, la desigualdad y la exclusión política- y una arraigada y extendida cultura de intolerancia y violencia como variables explicativas cruciales.⁵ Estos "mitos de la violencia" en Colombia han sido duramente criticados, principalmente sobre la base de que carecen de sustento empírico. En los apartes siguientes se revisarán algunos de estos argumentos.

Los mitos de la violencia

Cultura y violencia⁶

Mito: *"El mayor número de homicidios los produce una violencia cotidiana, derivada de un fenómeno cultural generalizado marcado por una alta dosis de intolerancia de los ciudadanos"*.



Para evaluar esta hipótesis los autores diferencian dos formas de violencia -impulsiva e instrumental- y muestran que, en el caso específico de Bogotá, entre 1997 y 1999 la tasa de violencia instrumental (30 pccmh) triplicó la de la violencia impulsiva (10 pccmh).⁷ Argumentan, además, que la concentración espacial del homicidio en algunos puntos críticos -la mitad se cometió en 84 lugares, donde habita el 25 por ciento de la población- y la dramática variación de la tasa entre barrios no son consistentes con la hipótesis de la cultura de violencia.

Sin embargo, esta interpretación tiene algunos problemas. Aunque justificable para otros propósitos, la distinción entre violencia impulsiva y violencia instrumental puede ser inapropiada para evaluar el impacto de la cultura de violencia sobre el homicidio. Específicamente, la vinculación de dicha cultura exclusivamente con la violencia impulsiva subestima el peso de los valores culturales de dos maneras. En primer lugar, la operacionalización de la violencia impulsiva sobre la base de homicidios no premeditados, resultantes de “problemas de convivencia, como las riñas o disputas por asuntos triviales”, excluye aquellos cometidos de manera deliberada y sistemática por individuos y grupos que también apuntarían a la existencia de una cultura de violencia.

El punto puede ilustrarse con el fenómeno de la “limpieza social”, que cobra sus víctimas principalmente entre los “marginados sociales”, tales como indigentes, trabajadoras sexuales, presuntos delincuentes, recicladores de basura, jóvenes marginales, trabajadores informales, habitantes de la calle, travestis, enfermos mentales y homosexuales.⁸ Puesto que por lo regular estos asesinatos se cometen de manera premeditada y con claros objetivos, podrían catalogarse como actos de “violencia instrumental”. Sin embargo, dado que las víctimas son seleccionadas porque “son vistas

como un estorbo social, irrecuperables para la sociedad o estéticamente desagradables”,⁹ podrían más bien (o también) considerarse como expresiones de intolerancia social y por ende de valores culturales.

En segundo lugar, inclusive si se aceptan algunos homicidios de carácter instrumental como indicadores de la cultura de violencia, determinar su existencia únicamente con base en homicidios cometidos por ciudadanos particulares excluye por definición los cometidos por actores organizados, tales como agentes del Estado y fuerzas irregulares. En otras palabras, el asesinato de más de cinco personas cada día y la desaparición de una casi cada dos días entre 1988 y 2000, por su afiliación política o pertenencia a organizaciones sindicales, sociales o de derechos humanos,¹⁰ no se considerarían como expresiones de una cultura autoritaria y violenta.

Si la cultura no se equipara con temperamentos fuertes o respuestas emotivas a los conflictos sino en un sentido tradicional, con patrones de comportamiento socialmente transmitidos, actitudes, creencias y reglas e instituciones formales e informales, estas consideraciones podrían extenderse a otras formas de violencia instrumental. Lo que se puede concluir de manera segura a partir de la evidencia es que la mayor parte de las muertes violentas en el país no son producto de riñas entre ciudadanos. Pero el poder explicativo de la cultura parece haber sido subestimado y el punto amerita una investigación más profunda.

Un problema final, sobre el que volveremos más adelante, está relacionado con el uso de la lógica de eliminación para determinar la importancia causal de diferentes factores. Baste por ahora señalar que el impacto de la cultura no puede desecharse con el argumento de que, puesto que los cambios culturales se producen de manera gradual y en una dirección, no podrían

⁷ De acuerdo con información de Medicina Legal, a nivel nacional los homicidios producto de riñas ascienden al 21 por ciento, mientras que la abrumadora mayoría son resultado de ajustes de cuentas (31 por ciento), atracos callejeros (16 por ciento) y confrontaciones armadas (9 por ciento). En el 23 por ciento de los casos se desconoce el móvil (Trujillo & Badel, 1998: 21).

⁸ Alrededor del 11 por ciento de las más de 30.000 víctimas de homicidio por razones sociopolíticas que no murieron en combate entre 1988 y 2000 eran personas socialmente marginadas. Cálculos basados en datos de la Comisión Colombiana de Juristas, resumidos en el Cuadro 1.

⁹ Salazar (1999: 17).

¹⁰ De acuerdo con información de la Comisión Colombiana de Juristas, recogida en el Cuadro 1.

explicar los cambios en las dinámicas de la violencia en la ciudad: en direcciones opuestas y en una sola década. Es probable que, como argumentan los autores, no se hayan producido cambios culturales bruscos. Sin embargo, contrario a lo que afirman, cambios dramáticos en la tasa de homicidio, inclusive en dos direcciones y en un corto período de tiempo, son “compatibles” con una arraigada cultura de violencia. Si bien los cambios en el “núcleo profundo” de la cultura tienden a producirse de manera lenta, los cambios en las “prácticas” pueden ocurrir rápidamente, como consecuencia de alteraciones en el medio en el que se desarrollan.¹¹ Por tanto, cambios en otros factores, tales como la prestación del servicio de seguridad,¹² la eficiencia del sistema judicial, la confianza en las instituciones y el nivel de denuncia, entre otros, podrían explicar las variaciones de la tasa.

Más allá del trabajo citado,¹³ valdría la pena señalar otros puntos. El primero es que cualquier intento por determinar el impacto de la cultura sobre la violencia exclusivamente con base en el homicidio sesgaría de antemano los resultados. Con excepción del atraco callejero, los indicadores de violencia instrumental (ajuste de cuentas y confrontaciones armadas) tienen una probabilidad mucho mayor de producir la muerte de las víctimas, puesto que ese es su principal propósito. Por otro lado, el homicidio resultante de riñas entre ciudadanos no es premeditado y por ende será excepcional.

Una evaluación general del impacto de los valores culturales sobre la violencia debería basarse no sólo en los actos violentos que más vidas cobran, sino también en los que más

afectan a las personas. La hipótesis se vería debilitada si se logra demostrar que no es posible vincular la cultura con la mayoría de ellos. Sin embargo, la evaluación de esta versión más amplia de la hipótesis exige cautela, puesto que la información disponible es menos confiable.¹⁴

El hecho de que, al igual que en la mayoría de los países del Tercer Mundo, el delito violento en Colombia adolezca de un subregistro considerable¹⁵ no sería problema si todas las categorías se vieran igualmente afectadas. Pero los estudios demuestran que el nivel de denuncia aumenta con la gravedad del delito.¹⁶ Puesto que Colombia se ajusta a los patrones internacionales, el homicidio, independientemente de la motivación, estará mejor documentado que otras formas de violencia, como la violencia doméstica y sexual, y las riñas que no terminan en muerte o lesiones graves.¹⁷ En consecuencia, la refutación de la formulación más general de la hipótesis sobre la base de que “el único indicador de violencia interpersonal disponible, las denuncias por lesiones personales, sigue cayendo”¹⁸ es problemática. Y también puede serlo el argumento de que “en ninguna de las pocas comparaciones internacionales disponibles sobre indicadores de criminalidad y violencia no homicida Colombia se destaca como un lugar excepcional”.¹⁹ Las comparaciones entre países con base en información oficial presentan problemas de validez y medición, como resultado de diferencias en la definición del delito y de variaciones en la confiabilidad de las fuerzas de policía y los sistemas judiciales.²⁰ Finalmente, puesto que por diferentes razones es posible que quienes tienen valores violentos

¹¹ Hofstede (1997: 279).

¹² Fácilmente pueden señalarse casos de países con bajas tasas de criminalidad y poco control policial, como Islandia. Por otro lado, en el distrito de Siloé, en Cali, el homicidio con arma de fuego aumentó en 103 por ciento después de la instalación de una base militar (Salazar, 1999).

¹³ Sus autores no pretenden refutar la hipótesis de la cultura de violencia en general sino en relación con el homicidio, aunque lo extienden a otras formas de violencia cuando arremeten contra la tesis de que “la violencia cotidiana en las ciudades...es la causa de la mayoría de los homicidios y lesiones no fatales del país” (énfasis añadido).

¹⁴ Como resultado de deficiencias en los sistemas de información y el sistema judicial y el temor a denunciar (Vélez et. al., 1999: 5). Es probable, además, que la información colombiana se vea afectada por otros factores -como la desigualdad, el nivel educativo, los ingresos y la tasa de urbanización- identificados en la literatura internacional como altamente correlacionados con el bajo nivel de denuncia del delito (Fajnzylber et. al., 2001: 10-11; 1998: 17)

¹⁵ Los delitos que dejan de denunciarse pueden ascender al 74 por ciento (Castro, et. al., 1999: 2). Una buena ilustración la proporciona el hecho de que, aunque de acuerdo con encuestas de victimización, entre 1985 y 1995 los delitos contra la libertad personal aumentaron en diez veces, las denuncias a la Policía sólo aumentaron en 26 por ciento (Rubio, 2000: 25).

¹⁶ Fejnzylber et. al. (2001: 6), (1998: 17-18); Bourguignon (1999: 4-5).

¹⁷ Pese a ello, de acuerdo con la Policía Nacional (1999), entre 1990 y 1999 el promedio anual de lesiones personales superó al de homicidios: 30.905 y 26.069, respectivamente.

¹⁸ Rubio (2000: 24).

¹⁹ *Ibíd.*

²⁰ Fajnzylber, et. Al., (2001: 10-11), (1999: 6, 8), (1998: 17).



nunca lleguen a ponerlos en práctica, determinar la existencia de una cultura de violencia exigiría trascender el análisis de los actos violentos y su motivación. Inquirir acerca de sistemas de pensamiento y actitudes hacia la violencia, incluyendo la aprobación de prácticas como la represión estatal, la limpieza social y la lucha armada, así como las que se llevan a cabo en la esfera privada, derivadas de factores como la dominación de género y edad y el honor, sería entonces un ejercicio necesario, aunque mucho más complejo.

Causas objetivas y violencia

Mito: *“Existen unas causas objetivas que explican la violencia en el país”.*

Parte del problema en la evaluación de esta hipótesis es el uso indiscriminado de los términos crimen y violencia. Mientras que en la presentación del “mito” los autores hacen referencia a la conexión entre causas objetivas y *violencia*, más adelante, y para apoyar su argumento, citan estudios que demuestran la ausencia de asociación entre *crimen* y pobreza.²¹ Si el objetivo es refutar la relación entre *crimen violento* y condiciones objetivas, debe señalarse una vez más que el homicidio no es un indicador preciso, puesto que probablemente la mayoría de los delitos violentos no serán fatales. Si se toman en cuenta todas las modalidades de delito violento, incluyendo las que no resultan en la muerte de las víctimas, puede aparecer un cuadro muy diferente. Encuestas de victimización realizadas en Cali, por ejemplo, muestran que la abrumadora mayoría de ellos se concentran en las comunas pertenecientes a los dos estratos más bajos: 66.3 por ciento de los robos, 65.3 por ciento de las heridas con

arma blanca, 74.6 por ciento de las heridas con arma de fuego y 66.7 por ciento de las amenazas de muerte. En todos los casos, el estrato más bajo es de lejos el más afectado.²² Otros estudios han demostrado que la violencia doméstica es más predominante en los estratos bajos.²³

Ahora, si el propósito es evaluar exclusivamente la relación entre las causas objetivas y el homicidio, la evidencia disponible aconseja cautela con respecto a refutaciones inequívocas. Dado el alto nivel de impunidad que impera en Colombia, y por ende la poca confiabilidad de la información sobre los victimarios, los autores hacen inferencias indirectas con base en la coincidencia de las áreas con mayor violencia de la ciudad y “la presencia de estructuras criminales asociadas con los mercados y las actividades ilegales”. Esto, sin embargo, puede dar pistas importantes sobre los móviles, pero no aclara quiénes ingresan a esas estructuras y sus razones para hacerlo. Por otro lado, estudios sobre criminalidad y violencia en Bogotá muestran que el mayor número de homicidios se comete en las localidades más pobres. En 1999, las dos más violentas (Ciudad Bolívar y Kennedy) tenían la mayor concentración de personas en condiciones de pobreza y miseria en relación con su población total.²⁴ La información sobre las víctimas también indica que el homicidio afecta principalmente a los pobres: el 95.1 por ciento y el 89.7 por ciento de las víctimas en Bogotá y Cali, respectivamente, vivían en barrios de estrato bajo.²⁵

Los autores aceptan que la evidencia empírica sobre la relación entre factores objetivos y violencia es la “más difícil de interpretar” y reconocen que “estudios comparativos

²¹ Muchos autores no comparten esta opinión. Fajnzylber, et. al. (2001: 2), por ejemplo, sugieren que “con una consistencia inusual en las ciencias sociales, las personas de clase baja y las que viven en zonas de clase baja tienen tasas oficiales de criminalidad más altas que las de otros grupos”. Bourguignon (1999: 21) también concluye que “la desigualdad de ingresos y la pobreza en las zonas urbanas pueden ser las causas principales de la criminalidad y la violencia” (énfasis añadido). Cabría señalar que esto no implica que los pobres cometan más delitos que otras clases. El tipo de delito varía con la clase social, y los asociados con las clases más altas —por ejemplo, la corrupción, ciertas prácticas para acceder a la riqueza y el poder (Camacho & Guzmán, 1997), y el apoyo a grupos irregulares armados— tienen serias repercusiones sobre la seguridad ciudadana.

²² Vélez et. al. (1999: 18). Cálculos del autor, con base en el Cuadro 4.3, p. 21.

²³ Vélez (2002), Gaviria & Vélez (2002). Aunque el impacto de las condiciones socioeconómicas tiende a desaparecer cuando se toma en cuenta la educación, no puede ignorarse el alto nivel de asociación entre estas dos variables en Colombia.

²⁴ Gutiérrez & Gallo (2000: 13-14); véase también Trujillo & Badel (1998). Las localidades pobres, sin embargo, difieren en cuanto al número de homicidios, lo que indica, como se señalará más adelante, que la pobreza no es el único factor explicativo.

²⁵ Trujillo & Badel (1998: 24-25). Para muchos tipos de delitos, tanto las víctimas como los victimarios tienden a encontrarse en la parte baja de la distribución del ingreso, como resultado de la discriminación estatal en la prestación de servicios de seguridad a favor de los vecindarios más pudientes (Fajnzylber, et. al., 2001: 2) y de la capacidad de dichos sectores para contratar seguridad privada (Bourguignon, 1999: 17-18).

internacionales han demostrado que hay *una relación de causalidad* entre la desigualdad y la violencia” (énfasis añadido). Puesto que muchos estudios respaldan la capacidad explicativa de por lo menos un factor objetivo -la desigualdad-, entre países y a través del tiempo, tanto para el robo como para el homicidio,²⁶ e independientemente de la medida de desigualdad utilizada,²⁷ las fuertes afirmaciones iniciales en contra de la hipótesis deberían, como mínimo, revisarse. La evidencia no justifica el calificativo de “mito” atribuido a la relación entre causas objetivas y violencia.

Por otro lado, la desigualdad no puede desligarse tan nítidamente de la pobreza, puesto que es su inclusión como parte de la ecuación de desigualdad lo que explica el efecto de esta última sobre la violencia. La desigualdad vinculada con la violencia no se refiere a la brecha entre los ricos y los menos ricos (digamos, entre las clases altas y las clases medias), sino al abismo entre quienes se benefician de la riqueza y los excluidos.

No está de más advertir que negar la relación entre pobreza y violencia es muy diferente a sugerir que la pobreza no es condición suficiente ni necesaria de la violencia. La primera afirmación, aunque incorrecta, tiende a popularizarse en Colombia. La segunda es cierta en el sentido de que si un factor (por ejemplo, pobreza) no es compartido por todos los casos de un mismo resultado (por ejemplo, violencia) no puede considerarse como condición necesaria de ese resultado. Y un factor (pobreza) compartido por casos con resultados diferentes (por ejemplo, violencia en unos y no violencia en otros), no puede considerarse como causa suficiente de ese resultado. La pobreza no es condición necesaria de la violencia porque ésta puede ser producida por otras razones, tales como factores psicológicos, ambición, exclusión política,²⁸ discriminación racial, etc. Tampoco es condición suficiente porque no conduce ineluctablemente a ella. No todas las

comunidades o sociedades caracterizadas por la pobreza presentan altas tasas de violencia o por lo menos no todo el tiempo.

Pero no es posible presentar conclusiones definitivas sobre la relación entre pobreza y violencia mediante la aplicación de una simple lógica de eliminación. Los análisis deterministas corren el riesgo de no incluir todas las variables relevantes, como sucede en muchos estudios que no incluyen factores políticos y sociológicos. Inclusive si estudios cuidadosamente diseñados incluyeran todas las variables relevantes, es difícil encontrar un fenómeno de importancia para las ciencias sociales que exhiba una causalidad tan simple, en términos de la necesidad o la suficiencia de una variable para un resultado determinado. Los análisis basados en la lógica de eliminación confrontan el problema de que aún si un factor o una combinación de factores considerados necesarios para un resultado está presente, el resultado puede no darse. Y aún si un factor o una combinación de factores considerados suficientes para un resultado está ausente, el resultado puede darse.²⁹ Los análisis sobre las causas de un fenómeno no pueden ignorar los efectos resultantes de la interacción entre variables, ni diferentes combinaciones de variables independientes o secuencias causales, en las que ninguna es condición necesaria o suficiente, que pueden producir el mismo resultado.³⁰ No es posible llegar a la conclusión de que no hay relación entre pobreza y violencia simplemente con base en evidencia empírica que demuestre la existencia de comunidades o sociedades caracterizadas por la pobreza que no experimentan violencia.

Esto nos lleva a los comentarios finales, referentes a la siguiente afirmación: “Más recientemente, algunos estudios corroboran que ni la pobreza ni la desigualdad producen en Colombia una violencia diferente a la que pueden generar en otros países, y concluyen que la exagerada tasa de homicidios se explica

²⁶ Fajnzylber, et. al. (2001: 3-4, 12, 14, 17).

²⁷ Fajnzylber, et. al., 1998: 13-14, 19). Sarmiento (1999: 9) también concluye que la desigualdad, medida por todas las variables del índice de calidad de vida, ha sido el factor más importante para el aumento de la violencia en el decenio de los noventa. Para resultados similares, véanse Gaitán (1995), Gutiérrez & Gallo (2002) y Rubio (2000).

²⁸ Resulta curioso que muchos de los estudios recientes no incluyan la exclusión política en las causas objetivas.

²⁹ Mahoney (2000).

³⁰ Bennett (1999).



primordialmente por la presencia y actividad de grupos armados irregulares -narcotraficantes, guerrillas y paramilitares- y el pobre desempeño de la justicia”. Este es un punto diferente, por cuanto ya no se trata de determinar si factores objetivos pueden producir violencia -ya que se reconoce que sí, tanto en Colombia como en otras partes-, sino si pueden explicar los extremadamente altos niveles de violencia en Colombia, en comparación con otros países con condiciones objetivas similares. Este punto se tratará más adelante, en el marco de la discusión sobre la conexión entre factores objetivos y conflicto armado.

Causas objetivas y rebelión

El argumento de que las condiciones objetivas no pueden explicar las rebeliones tampoco es novedoso. Pero argumentar que por sí mismas no pueden hacerlo es diferente a afirmar que carecen de importancia causal. Ya en la década de los setenta diferentes estudios habían identificado factores intermedios que pueden aumentar o disminuir la posibilidad de rebelión -la extensión y la intensidad de la frustración sobre un estado de cosas- y variables que pueden afectar el resultado final -legitimidad del régimen, ideología, cultura política, recursos, experiencias previas con la violencia y cálculos de costo/beneficio-.³¹

Es posible que un grupo en condiciones objetivas de privación nunca llegue a rebelarse, inclusive si resiente su situación. Las condiciones de extrema pobreza y exclusión pueden más bien llevar a la apatía o a la percepción de que cambiar el *statu quo* es imposible. La pobreza y la injusticia también pueden producir una violencia no canalizada políticamente. Con frecuencia, esta violencia se dirige principalmente contra las propias comunidades empobrecidas y no contra el régimen político, bien porque éste no es culpado por la situación o porque se le reconoce legitimidad o se confía en las instituciones

encargadas de canalizar y resolver los conflictos sociales. Pero la rebelión puede no materializarse, aún en contra de un régimen ilegítimo, si valores morales, éticos o ideológicos hacen inaceptables los métodos violentos de acción. Las consideraciones pragmáticas también pueden jugar un papel importante: con frecuencia quienes más razones tienen para rebelarse son quienes menos capacidad tienen para hacerlo, bien porque carecen de recursos materiales u organizativos, o porque la capacidad represiva del Estado puede ser tan abrumadora que cualquier intento resultaría fútil.³²

Aunque ocasionalmente sugieren estar analizando ambos fenómenos, muchos de los estudios recientes en realidad no explican la violencia en Colombia sino su actual alcance e intensidad. Y este es, por supuesto, un ejercicio válido e importante. Pero la crítica a los estudios que hacen énfasis en la relevancia de condiciones objetivas subyacentes, con el argumento de que la misma hipótesis que “supuestamente es válida para las condiciones actuales de Colombia... no podría explicar la existencia o inexistencia de violencia en períodos anteriores”,³³ es sólo parcialmente correcta. Ciertamente, la violencia anterior no puede explicarse por factores en ese entonces inexistentes. Lo contrario, sin embargo, no es necesariamente cierto: variables causalmente relevantes en fases previas de violencia pueden formar parte de la explicación de la violencia actual. Pese a su importancia para explicar la violencia explosiva de los últimos años, el narcotráfico y el colapso de la justicia -los factores enfatizados en los nuevos estudios-³⁴ no ocurren en un vacío social, económico y político; más bien son eslabones de una cadena causal más larga de la que muy probablemente condiciones objetivas -como la pobreza y la exclusión- son parte. La localización de una variable al final de la secuencia -aún dejando de lado el problema de los efectos resultantes de la interacción entre variables- no justifica

³¹ Véase, por ejemplo, Gurr (1970).

³² Como sugiere Aya (1979), quienes carecen de poder no pueden rebelarse. Véase también Tilly (1978).

³³ Gaitán & Montenegro (2000: 37).

³⁴ En algunos estudios, el colapso del “aparato preventivo y represivo del Estado” posibilitó el narcotráfico (Gaitán, 1995: 21). Otros sugieren que el narcotráfico y otras fuentes de riqueza aumentaron los incentivos para el delito y que el “consiguiente aumento de la criminalidad y el avance del narcotráfico causaron el colapso del sistema judicial” (Montenegro, et. al., citado en Gaitán & Montenegro, 2000: 34). Curiosamente, dado su escepticismo sobre las hipótesis culturales, estos últimos han sugerido que el narcotráfico “creó una cultura general de tolerancia y alcahuetería hacia el delito...”

que se le considere como “la causa” del fenómeno.

La crítica a muchos de los estudios sobre la violencia por no “establecer una jerarquía de causas” y adoptar más bien un modelo “aditivo”³⁵ puede ser justificada para estudios particulares, pero no en general para una metodología que pretenda rescatar la complejidad causal. Por otro lado, los esfuerzos por establecer tal jerarquía e identificar el *último* vínculo causal de un fenómeno con base en análisis cuantitativos pueden producir explicaciones extremadamente simplistas, como lo ilustra la siguiente afirmación, tomada de uno de los estudios comparativos sobre las rebeliones:

«...las guerras civiles ocurren cuando las organizaciones rebeldes son financieramente viables. La Milicia de Michigan fue incapaz de crecer más allá de un puñado de voluntarios de medio tiempo, mientras que las FARC en Colombia han crecido hasta emplear cerca de 12.000 personas. Los factores que explican esta diferencia entre el fracaso y el éxito no se encuentran en las “causas” que estas dos organizaciones rebeldes dicen representar, sino en las oportunidades radicalmente diferentes para captar recursos» (énfasis añadido).³⁶

En otras palabras, la capacidad o incapacidad de estos grupos armados para financiar sus operaciones, y no las diferencias políticas, institucionales, económicas y sociales entre los Estados Unidos y Colombia, explicarían el “éxito” de las FARC y el fracaso de la Milicia de Michigan.³⁷

Otros ataques contra la relación entre factores objetivos y violencia en Colombia se basan en análisis de la evolución del conflicto que muestran una asociación positiva entre niveles más altos de desarrollo y presencia guerrillera.

Más concretamente, Rubio (2000: 14-17) encuentra que para finales de los ochenta la probabilidad de presencia guerrillera era más alta en los municipios más ricos y en aquellos con índices más elevados de calidad de vida y un porcentaje mayor de ingresos derivados de tributos y de gasto público dedicado a la inversión.³⁸ Estas tendencias han sido corroboradas por otros estudios que resaltan la incidencia de la violencia en áreas de rápido crecimiento, distribución inequitativa de la riqueza y débil control estatal.³⁹ El estudio de Rubio también muestra que en los noventa la capacidad de predicción de aquellos factores que fueron útiles para identificar los municipios susceptibles de caer bajo la influencia de la guerrilla se redujo a una décima parte de lo que fue en la década anterior. Es decir que al mismo tiempo que la probabilidad de presencia guerrillera en municipios en los que previamente no ejercían ninguna influencia aumentó de 10 por ciento a comienzos de los noventa a cerca de 50 por ciento para 1997, se hizo más difícil predecir la localización exacta, a partir de las características de los municipios.⁴⁰

Sobre esta base se ha concluido que la “geografía de la violencia” no apoya la tesis que relaciona las causas objetivas con la violencia y que “a lo largo de los noventa el conflicto colombiano se desvinculó de las realidades económicas, sociales y políticas del país y adquirió su propia dinámica”.⁴¹ Sin embargo, estas afirmaciones son problemáticas. En primer lugar, no es el caso que las guerrillas hayan “perdido interés” en las zonas marginales de presencia histórica. Pese a haberse expandido hacia zonas no periféricas y urbanas, las guerrillas realizan la mayoría de sus acciones armadas en las áreas en las que tradicionalmente han operado.⁴² Segundo, como los mismos estudios afirman, las zonas de nueva riqueza hacia donde se han expandido las guerrillas se caracterizan por un

³⁵ Gaitán & Montenegro, 2000: 38.

³⁶ Collier (2000: 2).

³⁷ El argumento de que “si Urabá -con sus características específicas- estuviera en Suiza no sería violento” (Gaitán & Montenegro, 2000: 22) pasa por alto el hecho de que si Urabá estuviera en Suiza probablemente no tendría sus características sociales, económicas y políticas “específicas”.

³⁸ Otras variables positivamente asociadas en el estudio son una población mayor, un índice más alto de participación política, la edad promedio de la población, la desigualdad en las condiciones de vida, la proporción de población con estudios universitarios y el índice de masculinidad.

³⁹ Por ejemplo Gaitán (1995), Bejarano (1997) y Sarmiento (1999)..

⁴⁰ Rubio (2000: 18-20).

⁴¹ *Ibíd.*, p. 20.

⁴² Echandía (2000).



alto nivel de desigualdad, lo que es un importante factor objetivo.

Finalmente, y quizás más importante, lo que se puede concluir de manera inequívoca a partir de la evidencia es que las guerrillas operan independientemente de las características regionales. Es decir, en los últimos años estas condiciones específicas han perdido “autonomía”, a medida que la violencia en las regiones comenzó a seguir el patrón general de la violencia en el país.⁴³ Esto puede significar que en este punto del conflicto la presencia guerrillera ya no está determinada exclusivamente por factores que fueron importantes en las fases de emergencia o consolidación financiera. Parafraseando a Deas, “las guerrillas ricas hacen guerras ricas”. Como consecuencia de sus recursos y de su mayor capacidad militar, los rebeldes disponen hoy de una gama más amplia de opciones, incluyendo la posibilidad de tomar decisiones con base en consideraciones estratégicas previamente inconcebibles.

El argumento de que la guerra insurgente “está desvinculada de la realidad del país” debería evaluarse con base en las condiciones nacionales, en vez de aquellas que son específicas a las zonas de operación de los grupos armados. La hipótesis se justificaría si se logra demostrar que las condiciones que en el discurso rebelde justifican su lucha -es decir, la exclusión política, social y económica de vastos sectores- han cambiado radical o por lo menos significativamente. Y esto, evidentemente, depende en gran medida de interpretaciones subjetivas, aunque es posible demostrar que algunas de ellas han empeorado en años recientes.⁴⁴

Desde una perspectiva académica también es problemática la conclusión de que los recursos a su disposición han convertido a los insurgentes

en “señores de la guerra”, para quienes el conflicto armado ya no es un medio para lograr sus objetivos iniciales sino un fin en sí mismo.⁴⁵ Puede ser que el autor tenga razón, pero no es posible inferirlo inequívocamente a partir de la evidencia empírica.

Esta línea de razonamiento se ha apuntalado con evidencia e insumos teóricos de estudios comparados sobre las rebeliones que no respaldan la hipótesis de que las causas objetivas estén en la raíz de las mismas. Sin embargo, los argumentos más matizados del debate sobre los méritos relativos de los modelos de rebelión basados en la “avaricia” o en los “agravios” se han dejado de lado, para resaltar las aseveraciones más dramáticas en favor del primero -es decir, que la presencia de recursos saqueables y no los factores objetivos inciden de manera significativa en las rebeliones.⁴⁶

Debe señalarse que estos estudios comparativos no niegan finalmente la relación entre causas objetivas y conflicto. De hecho, con frecuencia reconocen que “en muchas sociedades existen severas injusticias objetivas que sustentan conflictos políticos intensos”.⁴⁷ No obstante, su argumento es que probablemente estas sociedades nunca llegarán a experimentar una guerra civil, independientemente de la intensidad de los agravios, puesto que los obstáculos para la acción colectiva son mucho más difíciles de superar en las rebeliones motivadas por la “búsqueda de justicia” que en aquellas motivadas por la “ambición de botín”. En su opinión, es muy probable que los mismos factores que producen los agravios acentúen simultáneamente los obstáculos para la acción colectiva, lo cual reduciría la probabilidad de la rebelión.⁴⁸

Por otro lado, estos estudios no presuponen ni concluyen que los rebeldes estén necesi-

⁴³ Gaitán (1995: 24-29).

⁴⁴ De acuerdo con Vélez (2002), aunque la pobreza en Colombia se redujo en 20 por ciento entre 1978 y 1995, en 1999 retornó al nivel de 1988. Por otro lado, siete medidas de desigualdad del ingreso -el factor objetivo identificado por todos los estudios como causalmente importante- muestran que la desigualdad era mayor en 1999 que en 1978.

⁴⁵ Rubio (2000: 20-21).

⁴⁶ Véanse, especialmente, Collier (2000, 1999), y Collier & Hoeffler (2000, 1999, 1998).

⁴⁷ Los autores están bien conscientes de que los conflictos violentos afectan principalmente a los países pobres (“la mayoría de los países más pobres del mundo están experimentando o han experimentado recientemente tales conflictos”), y llegan a sugerir que la guerra en África no se debe a su fraccionización étnica sino a su pobreza (Collier & Hoeffler, 2000; 1998).

⁴⁸ Collier & Hoeffler (2000: 13), Collier (1999: 7). Un problema con el argumento de estos autores es que con frecuencia no es claro lo que pretenden explicar. En algún momento afirman: “La guerra civil ocurre como resultado de la rebelión. En consecuencia, *el fenómeno a explicar es el surgimiento de la organización rebelde*” (2000: 3, énfasis añadido). No obstante, más adelante argumentan: “Sólo nos

riamente motivados por la avaricia (la “captura de recursos”). Tanto ésta como los agravios genuinos (la “rectificación de injusticias percibidas”) se reconocen como posibles causas de las rebeliones. Más bien, su argumento es que finalmente el motivo no es importante, puesto que el factor crucial para explicar una guerra civil es la viabilidad financiera de la rebelión, la cual es a su vez posibilitada por la capacidad para llevar a cabo actividades depredadoras.⁴⁹ En último término, y pese a algunas afirmaciones dramáticas en el sentido contrario, los autores reconocen la imposibilidad de elegir entre los dos modelos, puesto que ninguno prevalece sobre el otro: los agravios son importantes en el modelo de la avaricia, y la avaricia es significativa en el modelo de los agravios. El resultado es que un modelo que combine elementos de ambos es superior a cualquiera de ellos individualmente considerado.⁵⁰

No obstante, como ya se mencionó, en línea con una implicación de la teoría económica de las rebeliones, observadores nacionales y extranjeros han argumentado que, pese a que pudo haberse originado como una rebelión basada en la injusticia, el conflicto colombiano ha evolucionado hacia una rebelión motivada por la búsqueda de botín.⁵¹ Sin duda, las guerrillas colombianas poco reflejan su origen humilde: hace mucho tiempo dejaron de ser los pequeños grupos de autodefensas campesinas que huían de la represión estatal o la agresión terrateniente, para convertirse en organizaciones numerosas, bien armadas y extremadamente bien financiadas, con capacidad para adelantar acciones en todo el territorio

nacional⁵² y, ocasionalmente, confrontar abiertamente a las fuerzas armadas del Estado.

Sin duda también, en gran medida su expansión y mayor capacidad militar son resultado de una estrategia financiera cuidadosamente implementada que incluye la extorsión a individuos y empresas, el secuestro y conexiones con la economía de los cultivos ilícitos, entre otros. La pregunta es si de estos hechos pueden inferirse de manera inequívoca su motivación y objetivos. Así como no pueden determinarse simplemente con base en su discurso -como argumenta Collier-, tampoco pueden determinarse exclusivamente con base en sus acciones. Al fin y al cabo, la teoría económica de la rebelión reconoce que la depredación puede motivar la rebelión o simplemente hacerla posible: “el comportamiento depredador durante el conflicto puede no ser el objetivo de la organización rebelde sino su medio para financiar el conflicto”.⁵³ La depredación, en otras palabras, “puede ser tan sólo una necesidad lamentable en la ruta hacia la justicia percibida o el poder”.⁵⁴

Una explicación alternativa, igualmente compatible con las premisas de la teoría y las observaciones empíricas, sugeriría que los ingentes recursos a su disposición les han permitido a las guerrillas colombianas solucionar algunos de los problemas para la acción colectiva inherentes en las rebeliones basadas en la búsqueda de justicia. Su capacidad para proporcionar incentivos privados -como salarios, protección, orden y otros beneficios- y su poder de intimidación pueden haber solucionado, por lo menos en

interesan aquellas rebeliones lo suficientemente grandes y sostenidas, y en las que se presentan suficientes combates con las fuerzas gubernamentales, como para generar por lo menos 1.000 muertes relacionadas con la confrontación militar. *Esta es la definición empírica convencional de guerra civil y es el fenómeno que trataremos de explicar* (Ibid., énfasis añadido). Es obvio que el surgimiento de las rebeliones y su transformación en guerras civiles son fenómenos distintos, explicados por factores diferentes. Sin duda, la siguiente afirmación de Collier no es aplicable al origen de los grupos rebeldes en Colombia: “El principal impulso sistemático inicial para la rebelión parece ser un cálculo económico sobre los costos y las oportunidades de controlar productos primarios de exportación” (p. 2, énfasis añadido).

⁴⁹ Collier (2000: 2, 4).

⁵⁰ Collier & Hoeffler (2000: 21-22). Una versión menos categórica le concede preeminencia al modelo de la avaricia, aunque reconoce que al añadirle elementos del modelo de los agravios aumenta su capacidad de predicción: “Un modelo integrado, que incorpore algunas características del modelo de los agravios en el modelo de la avaricia, tiene un mejor desempeño que todos los otros modelos” (Ibid., p. 2).

⁵¹ “Empíricamente, muchas rebeliones parecen estar ligadas a la captación de recursos: diamantes en Angola y Sierra Leona, drogas en Colombia, y madera en Camboya” (Collier & Hoeffler, 2000: 2). “En algunos casos, estas dos motivaciones se confunden: por ejemplo, en Colombia grupos que inicialmente reivindicaban una motivación ideológica han transmutado a baronías de la droga” (Collier & Hoeffler, 1999: 1).

⁵² Durante el decenio de los noventa, el número de municipios con presencia guerrillera se quintuplicó, alcanzando la mitad de los municipios del país (Rubio, 2000: 25). Las guerrillas ejercen un grado importante de control en cerca de 200 municipios (Rangel, 2001).

⁵³ (Collier, 2000: 4).

⁵⁴ Ibid.



parte, el problema de *free-riding*, dando lugar a efectos de *bandwagon* y cascada de información, que a su vez han redundado en el fortalecimiento de estos movimientos.⁵⁵

Su mayor capacidad militar se ha traducido en un poder que probablemente no habrían obtenido como movimiento político por los canales institucionales. Es bien conocida su capacidad para movilizar a las comunidades en algunas regiones y para influir sobre la política local y regional mediante tácticas de presión e intimidación o pactos con las autoridades, llegando inclusive a determinar quién puede aspirar a los cargos públicos. Sus recursos y presencia en un número cada vez mayor de municipios les ha permitido ejercer funciones estatales, como la administración de justicia, la exacción de tributos y la imposición de orden. Todos estos actos son esencialmente políticos, aunque realizados por métodos no democráticos y autoritarios.⁵⁶

Comentarios finales

Pese a la distorsión ocasional de los argumentos estructurales,⁵⁷ los nuevos estudios han revitalizado el debate sobre la violencia en Colombia y mostrado la importancia de la discusión con sustento empírico y la utilización de herramientas metodológicas sólidas. Sin embargo, su creencia generalizada en la superioridad de los métodos cuantitativos debería ser atemperada por el hecho de que argumentos estructurales simplistas son con frecuencia refutados por análisis igualmente

reduccionistas y deterministas, apoyados por sofisticadas técnicas estadísticas y econométricas.

El valor de cualquier metodología depende del objetivo específico de cada estudio. Los estudios comparativos de un gran número de casos pueden proporcionar una guía útil con respecto a regularidades, factores que han demostrado importancia causal e hipótesis que pueden someterse a prueba en casos particulares, pero no pueden explicar instancias específicas de un fenómeno. Los estudios de caso o estudios comparativos de un número pequeño de casos pueden resultar más apropiados para tal propósito, mediante la identificación tanto de efectos como de mecanismos causales, y de secuencias y efectos de interacción contextualmente determinados que pueden explicar resultados diferentes entre casos con características compartidas o desviaciones de los patrones y regularidades encontradas en estudios comparativos de un gran número de casos.⁵⁸

Al igual que algunas de las investigaciones tradicionales, los nuevos estudios con frecuencia simplifican una realidad compleja y, como ellos, aspiran a ser relevantes para las políticas. Pero mientras que aquellos insisten en corregir las causas estructurales subyacentes para alcanzar la paz en el país, estos -“dada la urgencia del asunto” y sobre la base de la “jerarquía de causas” identificada y la creencia de que no puede hacerse mucho en el corto plazo para cambiar algunos de los factores

⁵⁵ Estas maneras de superar el problema de *free-riding* son sugeridas por Collier & Hoeffler (1999: 9-10) y Collier (1999: 7). Las mismas razones podrían ser parte de la explicación del rápido crecimiento de los grupos de autodefensa o paramilitares.

⁵⁶ Un examen de las consecuencias de esta estrategia trasciende el objetivo de esta presentación. Baste decir que inclusive si se le concede a los rebeldes colombianos el beneficio de la duda y se acepta que sus actividades dirigidas a la captación de recursos son necesarias para sostener una rebelión que esencialmente busca la justicia, los resultados, desde la perspectiva política, han sido extremadamente negativos. Su rápida expansión hacia nuevas zonas y su énfasis en el fortalecimiento militar han resultado en una pérdida significativa del carácter societal que las guerrillas se atribuían. La lógica imperante del “control de muchos recursos y pocos discursos” (Pécaut, 2001) ha llevado a la creación de una base de poder por medios autoritarios de control y a la violación sistemática de derechos fundamentales y normas humanitarias. La ironía es que entre más se han fortalecido militarmente, más se han debilitado en el terreno político. La creciente brecha entre su discurso y su práctica ha impedido la consolidación de vínculos amplios con organizaciones populares y movimientos sociales, especialmente en los centros urbanos, y la ausencia de un régimen militar o neopatrimonial ha impedido la creación de la amplia coalición multiclasista que demostró ser esencial para el triunfo de los rebeldes cubanos y nicaragüenses.

⁵⁷ Como cuando Montenegro et. al. (citado en Gaitán & Montenegro, 2000: 33) afirman que de acuerdo con los análisis tradicionales los colombianos “son peores que el resto de personas del planeta”, o que los estudios que enfatizan en la ausencia del Estado como un importante factor causal sugieren que “si se construyeran más acueductos y carreteras la gente dejaría de matar”.

⁵⁸ Contrario a lo que sugieren algunos de los nuevos estudios, las explicaciones de la violencia en Colombia no deberían “soportar la prueba internacional”, si su propósito no es generalizar a partir de la experiencia colombiana para producir una “teoría” de la violencia, sino únicamente explicar la violencia en el país o en algunas de sus regiones. Sin embargo, es claro que los estudios que se limitan a explicar la violencia en Colombia simplemente con base en una o algunas variables quedan legítimamente expuestos al ataque de “que otros países y sociedades con las mismas condiciones también deberían ser violentas pero no lo son”.

objetivos- concentrarían los “esfuerzos en establecer obstáculos a la financiación de la guerra”.⁵⁹

Una vez más, la discusión sobre las condiciones para un proceso de paz exitoso en Colombia trasciende los propósitos de esta presentación. Pero al menos puede plantearse que la inclusión de las causas objetivas de la violencia en el discurso oficial constituyó un avance importante hacia la paz, puesto que generó una coincidencia en la interpretación de las raíces del conflicto y facilitó el consenso alrededor de una agenda de negociación en gran medida centrada en ellas. También cabría preguntarse

sobre el posible impacto en la solución negociada de negar la racionalización de la rebelión de uno de los actores principales, sobre la base de que no es apoyada por algunas teorías, por lo demás controversiales, de las ciencias sociales. Particularmente, si se considera que inclusive la teoría económica de las rebeliones aceptaría que “aunque una estrategia exitosa de prevención de conflictos no debería apuntar a reducir las injusticias objetivas sino la posibilidad de depredación”, una vez que la violencia ha estallado se hace necesario tratar los agravios subjetivos de las partes, sin importar cuán “artificialmente contruidos” puedan ser.⁶⁰

⁵⁹ Rubio (2000: 63).

⁶⁰ Collier (2000).



Bibliografía

- AYA, Rod (1979), "Theories of Revolution Reconsidered", en *Theory and Society*, Vol. 8, No. 1, pp. 39-99.
- BEJARANO, Jesús, et. al. (1997), *Colombia: Inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*, Fonade y Universidad Externado de Colombia.
- BENNETT, Andrew (1999), "Causal Inference in Case Studies: From Mill's Methods to Causal Mechanisms", paper presented at the *American Political Science Association Conference*, Atlanta, Georgia.
- BOURGUIGNON, Francois (1999), "*Criminalidad, violencia y desarrollo inequitativo*", Washington, abril.
- CAMACHO, Álvaro & Álvaro GUZMÁN (1997), "La violencia urbana en Colombia: teorías, modalidades, perspectivas", en *Nuevas visiones sobre la violencia en Colombia*, IEPRI y Fescol.
- CASTRO Manuel, Jorge ARABIA y Andrés CELIS (1999), "*El conflicto armado: la estrategia económica de los principales actores y su incidencia en los costos de la violencia 1990-1998*", Departamento Nacional de Planeación / UPRU.
- CASTRO, Manuel y SALAZAR, Manuel (1998), "La respuesta a la criminalidad y la violencia en Colombia: Acciones del Estado para promover la convivencia y la seguridad en las ciudades", trabajo presentado en la conferencia *Violence in Latin America: Policy Implications from Studies on the Attitudes and Costs of Violence*, Harvard University, febrero 19-20.
- COLLIER, Paul (2000), "*Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy*", The World Bank, junio 15.
- COLLIER, Paul (1999), "Doing Well out of War", trabajo presentado en *Conference on Economic Agendas and Civil Wars*, Londres, abril 26-27.
- COLLIER, Paul & Anke HOEFFLER (2000), "*Greed and Grievance in Civil War*", The World Bank, abril 26.
- _____ (1999), "*Justice-Seeking and Loot-Seeking in Civil War*", The World Bank, febrero 17.
- _____ (1998), "On Economic Causes of Civil War", *Oxford Economic Papers* 50, pp. 563-573.
- Comisión Colombiana de Juristas (2000a), *Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. Informe de avance: abril a septiembre del 2000*.
- _____ (2000b), *Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. Informe de avance sobre 2000*.
- _____ (1999), *Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. Informe de avance sobre 1999*.

- ECHANDÍA, Camilo (2000), "El conflicto armado colombiano en los años noventa: Cambios en las estrategias y efectos económicos", en *Revista Colombia Internacional*, No. 49/50, mayo-diciembre.
- FAJNZYLBER, Pablo, Daniel LEDERMAN y Norman LOAYZA (2001), "Inequality and Violent Crime", *Journal of Law and Economics*, agosto.
- FAJNZYLBER et. al., (1998), "Determinants of Crime Rate in Latin America and the World: An Empirical Assessment", The World Bank, World Bank Latin American and Caribbean Studies, *Viewpoints*.
- GAITÁN, Fernando (1995), "Una indagación sobre las causas de la violencia en Colombia", en Malcolm Deas y Fernando Gaitán, *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, Fonade y Departamento Nacional de Planeación.
- _____ y Santiago MONTENEGRO (2000), "Un análisis crítico de estudios sobre la violencia en Colombia", trabajo para la conferencia *Crimen y Violencia: Causas y Políticas de Prevención*, Bogotá, mayo.
- GAVIRIA, Alejandro y Carlos VÉLEZ (2002), "*¿Who Bears the Burden of Crime and Violence in Colombia?*", The World Bank Group.
- Gurr, Ted R. (1970), *Why Men Rebel*, Princeton, Princeton University Press.
- GUTIÉRREZ, Javier y GALLO, Dalila (2000), "Violencia y criminalidad en Santa Fe de Bogotá: Posibles determinantes y relaciones de doble causalidad", en *Estudios de Economía y Ciudad*, No. 10, mayo.
- HOFSTEDDE, Geert (1997), *Culture and Organizations: Software of the Mind*, New York, McGraw Hill.
- LLORENTE, María V., Rodolfo ESCOBEDO, Camilo ECHANDÍA y Mauricio RUBIO (2001), "Los Mitos de la Violencia", en *Revista Cambio*, julio 9-16.
- MAHONEY, James (2000), "Strategies of Causal Inference in Small-N Analysis," in *Sociological Methods and Research*, Vol. 28 No. 4, May, 387-424.
- PÉCAUT, Daniel (2001), *Guerra contra la sociedad*, Bogotá, Editorial Planeta.
- Policía Nacional (2000), *Criminalidad*, No. 43.
- _____ (1999), *Criminalidad*, No. 42.
- RANGEL, Alfredo (2001), "El conflicto armado en Colombia y la experiencia internacional", en Alfredo Rangel, *Guerra insurgente: Conflictos en Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia*, Bogotá, Intermedio Editores.
- RUBIO, Mauricio (2000), "*Violencia y conflicto en los noventa*".
- SALAZAR, Marcela (1999), "Violencia política, conflicto social y su impacto en la violencia urbana", en *Reflexión Política*, marzo.
- SARMIENTO, Alfredo (1999), "Violencia y Equidad", en *Planeación y Desarrollo*, Vol. XXX, No. 3, julio-septiembre, Departamento Nacional de Planeación.
- TRUJILLO y BADEL (1998), "Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996", Departamento Nacional de Planeación, *Archivos de Macroeconomía*, documento 76, marzo 10.
- TILLY, Charles (1978), *From Mobilization to Revolution*, New York, McGraw-Hill.
- VÉLEZ, Luis, et. al. (1999), *Victimization in Colombia: The City of Cali: An Exploratory Analysis*, Final Report, World Bank Project on Crime in LAC Cities, octubre.
- VÉLEZ, Carlos (2002), "Colombia Poverty Report", The World Bank Group.